

Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

En autos RIT T-1749-2018, RUC 1840147093-6, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulados “Meza con Subsecretaría del Interior”, por sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se rechazó la demanda de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido interpuesta por don Elvis William Meza Cabrera en contra de la Subsecretaría del Interior. Asimismo, se acogió la demanda subsidiaria y se declaró la existencia de una relación laboral entre las partes en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2014 al 31 de agosto de 2018, condenando a la demandada a las indemnizaciones derivadas de la declaración de injustificación del despido, recargo legal, la solución de las cotizaciones previsionales en AFP Hábitat durante el tiempo en que se extendió la relación laboral y el pago de las cotizaciones de salud en la Isapre Consalud entre los meses de abril de 2014 a octubre de 2015, periodo en el cual no se acreditó pago alguno, con los reajustes e intereses contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo y rechazó la demanda de nulidad del despido.

Las partes dedujeron recursos de nulidad y la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de veintiocho de julio de dos mil veintidós, desestimó el del actor y acogió el de la demandada, por lo que invalidó parcialmente el fallo de mérito y dictó el de reemplazo, eximiendo a la demandada de la obligación de pagar las cotizaciones de salud entre los meses de abril de 2014 a octubre de 2015, rechazando, además, el pago de intereses y multas respecto al incumplimiento de dichas prestaciones, manteniendo, en lo demás, la decisión del tribunal de base.

Respecto de dicho pronunciamiento el demandante interpuso recurso de unificación de jurisprudencia para que esta Corte lo acoja y dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas por uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenida en las diversas resoluciones y que



hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna de la o de las que se invocan como fundamento.

**Segundo:** Que el demandante solicita se unifique la jurisprudencia, determinando la procedencia de la sanción de la nulidad del despido y del pago de cotizaciones de seguridad social, en particular, las referidas a las de salud y el seguro de cesantía, más el pago de reajustes e intereses, cuando la relación laboral ha sido declarada por la sentencia que se impugna.

Reprocha que la decisión se apartara de la doctrina sostenida en las decisiones que acompaña para efectos de su cotejo, que corresponden a las dictadas por la Corte de Apelaciones de San Miguel en causa rol N°467-2018 y por esta Corte en los ingresos rol N°11.419-2019, 45.842-2016 y 381-2017.

Las dos primeras sostienen que, establecida la existencia de relación laboral con un municipio u otro organismo integrante de la Administración del Estado, debe accederse al cobro de las cotizaciones de seguridad social adeudadas durante la vigencia del contrato, porque la ley considera que el entero de los aportes que deben pagar los trabajadores para los efectos previsionales, corresponde a una carga que le compete al empleador, mediante descuento que debe ejercer de sus remuneraciones, a fin de ponerlos a disposición del órgano previsional pertinente, dentro del plazo que la ley fija, agregando la segunda que la naturaleza imponible de los haberes es determinada por el legislador, de modo que es una obligación inexcusable del empleador.

En tanto que las últimas, destacan el carácter declarativo de la sentencia, del que se deriva que si el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, corresponde aplicarle el castigo pecuniario que prevé, consistente en el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador, desde la fecha del despido hasta la de su convalidación, sin que sea obstáculo para ello que haya sido el fallo el que reconoció la existencia de una relación de naturaleza laboral.

**Tercero:** Que la decisión impugnada, en lo que interesa, desestimó el recurso de nulidad del actor y acogió parcialmente el recurso de nulidad planteado por la demandada, ambos fundados en la causal de infracción de ley vinculada con lo dispuesto en los artículos 58 y 162 del estatuto laboral y 17 y 19 del Decreto Ley N° 3.500.

Desestimó el recurso del actor en cuanto perseguía la declaración de nulidad del despido, siguiendo para ello la doctrina fijada en los fallos de unificación de jurisprudencia que indica, conforme a la cual si bien la sentencia que reconoce una relación laboral es de naturaleza declarativa, procediendo la sanción en caso de constatar el no pago de las cotizaciones, dicha situación



cambia cuando el empleador es un órgano de la Administración del Estado respecto de los contratos a honorarios que celebra, dado que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal, que, en principio, le otorgaba una presunción de legalidad, no configurándose la hipótesis de simulación o fraude.

Por otro lado, desestimó la impugnación de la demandada, en lo relativo a la acción de cobro de cotizaciones del seguro de cesantía, señalando, en primer término, que la *“declaración de existencia de relación laboral y despido injustificado...no tiene como sanción la pérdida del derecho que la ley reconoce al empleador en el artículo 13 de la Ley N° 19.728. Por lo cual, y atendida la naturaleza de esta cotización, la cual es un seguro que opera bajo determinadas circunstancias previstas por la ley, a juicio de esta Corte, respecto de este verdadero seguro, como se ha mencionado, no se vislumbra la infracción de ley alegada por el recurrente.*

Finalmente, el fallo impugnado acogió el recurso de nulidad en lo relativo a la pretensión de eximir a la demandada del pago de las cotizaciones de salud respecto del periodo en el que se acreditó que no se encontraban solucionadas (correspondiente al que media entre los meses de abril de 2014 a octubre de 2015, pues resultó acreditado que el actor entre el mes de noviembre de 2015 al término de la relación laboral, pagó sus cotizaciones de salud en la ISAPRE respectiva), señalando que respecto a *“...la procedencia de las cotizaciones de salud, cabe mencionar que para el trabajador, no existe un beneficio inmediato o futuro que pueda hacer valer con esos pagos, lo cual marca sin duda diferencias con las cotizaciones previsionales...”* agregando que *“...las prestaciones de salud no existieron en su momento y el trabajador no aportó antecedentes en este aspecto, por lo cual esta Corte entiende que se infringen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y el artículo 2 de la Ley N° 19.880, lo anterior, porque no corresponde al Fisco de Chile pagar a las instituciones de salud por las cotizaciones no canceladas durante el periodo ya indicado, ya que éstas no fueron satisfechas oportunamente por la entidad estatal empleadora, puesto que obligar al Fisco a soportar esta contribución, la cual importa un pago no debido, sin una contraprestación y como tal constituye un enriquecimiento sin causa y, al mismo tiempo, no generará para el trabajador ningún beneficio”,* razón por la que se eximió de su pago en el fallo de reemplazo.

Por último, en relación al cobro de intereses, reajustes y multas relacionados con el incumplimiento del pago de las cotizaciones de salud, la judicatura de fondo señaló que, atendido lo dispuesto en *“...los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de las República, artículo 58 del estatuto laboral, artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500 y artículo 4 del Decreto Ley N° 1.263, sumado al*



*principio de legalidad administrativa, resulta del todo improcedente condenar al Fisco de Chile al pago de intereses y multas”, rechazando su pago en el fallo de reemplazo, a diferencia de la solicitud de reajustes, la que se dio lugar, atendido que “...éstos permiten de manera clara y precisa conservar el valor adquisitivo de los montos adeudados al trabajador o trabajadora, a fin de que éstos montos no pierdan el originalmente fijado en atención a la depreciación de la moneda nacional”.*

Por consiguiente, se invalidó parcialmente el fallo impugnado y se dictó el de reemplazo, en que se liberó a la demandada de la obligación de pagar las cotizaciones de salud entre los meses de abril de 2014 a octubre de 2015, rechazando, asimismo, el pago de intereses y multas respecto al incumplimiento en el pago de las cotizaciones previsionales de los meses de abril de 2014 a agosto de 2018 adeudadas en AFP Hábitat, manteniendo, en lo demás, la decisión del tribunal de instancia.

**Cuarto:** Que, en consecuencia, al cotejar lo resuelto en las sentencias acompañadas por el recurrente roles N°11.419-2019, 45.842-2016 y 381-2017 (descartando el análisis del fallo rol N° 467-2018 de la Corte de Apelaciones de San Miguel por no haberse acompañado el respectivo certificado de encontrarse ejecutoriada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 483-A del Código del Trabajo) con lo decidido en la que se impugna, es posible concluir que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre las materias de derecho propuestas, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta.

**Quinto:** Que respecto de uno de los asuntos planteados por el demandante, esto es, la aplicación de la sanción de la nulidad de despido cuando la sentencia que se impugna declara que el vínculo entre las partes queda regido por el Código del Trabajo, cabe hacer presente que se trata de una materia sobre la cual, en algún momento, existieron distintas interpretaciones, como se advierte de las sentencias ofrecidas por la parte, pero, lo cierto es que a partir de la dictada en la causa rol N° 41.500-2017, una nueva comprensión doctrinal del tema condujo a alterar la jurisprudencia que se venía sosteniendo sobre el asunto, de manera que a contar de dicho fallo, como se ha reiterado en las dictadas en los autos rol N°37.339-2017, 36.601-2017, 28.229-2018, 4.440-2019 y 21.989-21, entre muchas otras, se ha decidido que tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley



18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

También se ha considerado que la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, por lo que el recurso deberá ser rechazado en lo que a este acápite concierne.

**Sexto:** Que, asimismo, el recurrente ha solicitado un pronunciamiento acerca de la procedencia de la condena al empleador al pago de las cotizaciones de salud y cesantía devengadas durante la vigencia de la relación contractual que la sentencia impugnada calificó como laboral.

**Séptimo:** Que, para decidir este segundo aspecto, es necesario, en primer término, reiterar que la premisa que esta Corte ha sostenido invariablemente en materia de cotizaciones de seguridad social, está dada por el reconocimiento de la orden contenida en el artículo 58 del Código del Trabajo, que impone al empleador deducir de las remuneraciones de los trabajadores *“las cotizaciones de seguridad social”*, tratándose de un descuento de carácter de obligatorio que las afecta, cuya naturaleza imponible es determinada por ley, lo que hace inexcusable su cumplimiento, como lo refuerzan y precisan los artículos 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, que establecen la obligatoriedad del sistema para los afiliados menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres y menores de sesenta años si son mujeres, y señalan que es el empleador quien debe declarar y pagar las cotizaciones en los organismos pertinentes dentro de las fechas indicadas.

Además, para sostener la vigencia de la obligación, sin perjuicio de que la relación, en su origen, no haya sido reconocida como laboral por las partes, se ha acudido a la presunción contenida en el artículo 3°, inciso segundo, de la Ley N° 17.322, atendidos los argumentos previos y el carácter declarativo que tiene la sentencia laboral, que esta Corte ha reconocido invariablemente, como se advierte de las sentencias dictadas en los antecedentes Rol 6.604-2014, 9.690-2015, 40.560-2016, 76.274-2016 y 3.618-2017, entre otras



Por otra parte, se ha dicho también que los razonamientos precedentes son comprensivos tanto de las cotizaciones previsionales como de salud, atendido el tenor literal del citado artículo 58 del código del ramo, que al establecer la ya referida obligación alude a las “*cotizaciones de seguridad social*”, misma formulación amplia que utilizan los artículos 1 y 3 de la Ley N°17.322; y que, por lo demás, corresponde a la judicatura dar eficacia a los derechos consagrados en el artículo 19 N°9 y 18 de la Constitución Política, que obliga al Estado, a través de todos sus Poderes, a garantizar el acceso de todos los habitantes a las prestaciones de salud y seguridad social, lo que dada la configuración que la legislación ha hecho del sistema, supone velar por el oportuno cumplimiento de la obligación de aportar a financiar los sistemas que las administran, sea de manera directa para los trabajadores independientes o a través de la retención del empleador para los dependientes.

Luego, se debe agregar que lo anterior resulta aplicable también a las cotizaciones que financian el seguro de cesantía consagrado por la Ley N°19.728, pues corresponde igualmente a uno establecido en forma obligatoria en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, de modo que el inicio de la relación laboral de un trabajador no sujeto al seguro generará su incorporación automática a éste y la obligación de cotizar en los términos establecidos en el artículo 5° de la misma ley y, en caso de incumplimiento, el artículo 11 de la ley prevé un sistema de cobro y sanciones similar al del DL N° 3.500, haciéndole aplicable numerosas normas de la Ley N°17.322, que regula la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social. De manera que por los fines que satisface este seguro, el carácter obligatorio y universal con que se ha impuesto, y por la técnica de pago y cobro de las cotizaciones que contribuyen a financiarlos, no cabe sino concluir que se trata de una prestación de seguridad social a efectos de lo previsto en el artículo 58 del Código del Trabajo, por lo que, en principio, y sin perjuicio de lo que se precisará más adelante, si la obligación no fue cumplida durante la vigencia del contrato, deberá serlo con posterioridad.

Por consiguiente, acreditado que el empleador no cumplió con su obligación previsional durante la vigencia del vínculo, la condena debe incluir la de entero de las previsionales propiamente tal, como las de cesantía y salud.

**Octavo:** Que no obstante que asiste al empleador el deber legal de pagar las cotizaciones de salud de sus trabajadores durante la vigencia del contrato, tal como ha sido ya referido por esta Corte (rol 122.010-22) la situación varía una vez concluida la relación laboral y la obligación deja de tener objeto, puesto que el dependiente ya no podrá acceder en forma retroactiva a las prestaciones de salud



que esos pagos estaban destinados a financiar, por lo que sólo podrían restituirse las sumas que haya enterado directamente en el organismo administrador respectivo, sea Fonasa o alguna Isapre, para financiar su sistema de salud.

En efecto, como se expuso en la sentencia dictada en causa rol N°98.552-2022, no hay duda que en el caso de los trabajadores dependientes constituye una obligación del empleador el deducir de las remuneraciones de sus empleados las cotizaciones de seguridad social, dentro de las cuales se encuentran las destinadas al pago del sistema de salud que ellos escojan; exigencia que no resulta enervada por la circunstancia de haberse reconocido la existencia del vínculo laboral sólo mediante la dictación de la sentencia de mérito, por cuanto, su naturaleza declarativa lleva a concluir, que tal vínculo se retrotrae con antelación a la data del pronunciamiento que lo reconoce, extendiéndose desde la fecha en que se configura, época desde la cual, se hace aplicable la presunción de derecho contenida en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 17.322. De modo tal que se trata de una carga que le compete al empleador, mediante descuento que debe ejercer de las remuneraciones de sus empleados, con el fin de ponerlos a disposición del órgano previsional pertinente, dentro del plazo que fija la ley; y la naturaleza imponible de los haberes es determinada por el legislador, en consecuencia, es una obligación inexcusable del empleador atendida la naturaleza de las remuneraciones, realizar las deducciones pertinentes y efectuar su posterior entero en los organismos previsionales respectivos desde que se comenzaron a pagar las remuneraciones.

Pero deben también considerarse las diferencias existentes en las diversas áreas de la seguridad social, pues no es lo mismo el sistema de previsión, que el de salud. Como es sabido, el primero funciona, en síntesis, mediante el régimen denominado de capitalización individual, en virtud del cual cada trabajador es dueño de una cuenta singular única de ahorro para su jubilación en la que se ingresan los fondos retenidos de sus remuneraciones, con el fin de ser administrados por una entidad especialmente autorizada para ello, de tal forma, que la pensión que el afiliado recibirá para sostenerlo en su vejez, dependerá de los ahorros acumulados en la vida de cada trabajador, de modo que, cuando el empleador soslaya dicha obligación provoca un detrimento en la posición previsional que la persona tendrá en su futuro, por lo que corresponde que el empleador que no realizó tales pagos deba efectuarlos directamente a la Administradora de Fondos de Pensiones pertinente, y así, reparar el perjuicio provocado por la falta de entero en la cuenta individual del empleado. En tanto que en el segundo, el sistema de salud nacional está compuesto por un régimen mixto



que funciona sobre la base de un seguro, en el cual, los trabajadores pueden optar por adscribirse al sistema de seguro público, denominado Fonasa (Fondo Nacional de Salud), o al privado, administrado por las Isapres (Instituciones de Salud Previsionales), y en el caso de los trabajadores dependientes, sin importar el sistema al cual pertenezcan, este funciona a través de un seguro con diversas coberturas de salud, que opera mediante el pago de una cotización mínima del 7% de sus ingresos mensuales, de manera que sea Fonasa o una Isapre, estas financian las prestaciones de salud según el plan que corresponda o haya contratado cada afiliado. Si un trabajador no hace uso de tales coberturas, no se exime del pago de la cotización mínima o pactada, ni recibe devoluciones por las prestaciones no utilizadas.

Por lo que, de ordenarse el pago que se ha solicitado, se produciría un enriquecimiento sin causa en la entidad de salud que recibiría el pago sin generar para el trabajador ningún provecho, rédito ni utilidad, pues el instituto de salud prestador de los servicios sería el único beneficiario, sin que exista ninguna contraprestación asociada a las cotizaciones recibidas, por cuanto la cobertura de salud no opera de forma retroactiva, sino que, en la lógica del contrato de seguro, cubre eventualidades y contingencias futuras.

Por consiguiente, la entidad administradora de prestaciones de salud, queda excluida de reclamar su pago, pues carece de legitimación para tal petición, al no existir deuda a su respecto que pueda ser judicialmente objeto de requerimiento; sin perjuicio del derecho del trabajador de reclamar el perjuicio patrimonial que el incumplimiento de su empleador le ocasionó, persiguiendo el resarcimiento de los gastos en que haya incurrido con el fin de mantener su salud sin quebrantos durante el período que abarcó la relación laboral.

Atendido lo razonado, el recurso de unificación de jurisprudencia relativo a este capítulo deberá ser desestimado, pues no obstante haberse demostrado una dispersión jurisprudencial, el razonamiento efectuado por la sentencia impugnada al eximir a la demandada del pago de las cotizaciones de salud durante el tiempo en que se extendió la relación laboral y que no fueron solucionadas por el actor, a juicio de esta Corte, resulta correcto.

**Noveno:** Que, por otra parte, en materia de cotizaciones de seguro de cesantía, tal como ha sido referido por esta Corte (rol 32.396-2022) debe efectuarse una prevención adicional, dado que su financiamiento, a diferencia de lo que ocurre en cuanto a previsión y salud, es tripartito, conformándose por aportes del trabajador, del empleador y del Estado. Tratándose de dependientes con contrato de trabajo indefinido, como ocurre en el caso, la contribución al seguro, según lo prevé el artículo 5 de la Ley N° 19.728, se divide en un 0,6% de





las remuneraciones imponibles de cargo del trabajador, un 2,4% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador y un aporte del Estado que corresponde a un monto global que se entera anualmente.

Entonces, sobre la base de lo dicho, en el caso del trabajador que no registra pago de estas cotizaciones durante la vigencia del contrato, sea efectuado por él o por su empleador, se declarará que éste debe solucionarlas, pero, limitadas al porcentaje que es de su cargo y no el que corresponde solventar al trabajador con su patrimonio, porque, con ello, se configuraría un pago doble, gravando en forma desmedida y desigual al ente público.

**Décimo:** Que los razonamientos previos deben ser contrastados con los hechos asentados por la sentencia impugnada y los antecedentes allegados por las partes, de los que se desprende que la relación laboral entre las partes se desarrolló entre el 1 de abril de 2014 al 31 de agosto de 2018, siendo formalizada a través de una sucesión de contratos de prestación de servicios a honorarios, sin que exista cláusula por la cual se libere a la demandada del pago de cotizaciones de seguridad social y las relativas al seguro de cesantía, las que no se acreditó su solución.

**Undécimo:** Que, por consiguiente, procede ordenar el pago de las cotizaciones relativas al seguro de cesantía, por todo el lapso de vigencia del vínculo laboral, pero, sólo respecto de la porción de cotización de cargo del empleador, equivalente al 2,4% de la remuneración imponible.

**Duodécimo:** Que, en cuanto al tercer punto a dilucidar, y en conformidad a lo previamente expuesto, es posible asentar, como se dijo, que la regla en materia de cotizaciones de seguridad social, esto es, previsionales, de cesantía y de salud, es la vigencia de la obligación de pago por parte del empleador, salvo que tratándose de contrataciones originadas en un contrato de prestación de servicios suscrito con un órgano de la Administración del Estado, amparado en origen por la presunción de legalidad y en que el prestador de servicios tuvo durante su vigencia la apariencia de trabajador independiente, las partes hayan hecho de su cargo el cumplimiento de la obligación o, sin tal pacto, que éste las haya enterado directamente, sea en forma total o parcial.

En consecuencia, de no existir tal cláusula en el respectivo contrato de prestación de servicios y siempre que el pago de las cotizaciones no haya sido totalmente solucionado por el trabajador, deberá ser cumplido por el empleador, lo que conduce a otra arista del problema, referida a las sanciones que el artículo 19 del Decreto Ley 3.500 y la Ley N°17.322 imponen al empleador que pague fuera del plazo que la normativa establece, pues de acuerdo a los incisos 7, 10 y 11 del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y a los artículos 21 y 22 a) de la Ley



N°17.322, la falta de declaración y pago oportuno de las cotizaciones previsionales queda sujeta a una multa a beneficio fiscal, además de incrementarse su monto con los reajustes e interés penal que establecen.

Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la tantas veces mencionada presunción de legalidad, debe concluirse que no puede tenérseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, pues resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales.

Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador, amparado por la referida presunción, deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322 (ítem que, en todo caso, había sido otorgado en la sentencia de primera instancia y no modificado por el fallo de nulidad), y con intereses, los que sólo se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en la Ley 17.322, pues considerando lo dicho se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán ser determinados en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo.

Además, a fin de mantener la debida concordancia con los razonamientos antes expuestos acerca del origen del contrato celebrado entre las partes, el cobro de dichas cotizaciones deberá excluir las multas a que aluden los artículos 19 inciso séptimo del Decreto Ley N°3.500 y 22 a) de la Ley 17.322.

**Décimo tercero:** Que, en tal circunstancia, y a modo de colofón, yerra la Corte de Apelaciones de Santiago al rechazar el recurso de nulidad del actor y, en fallo de reemplazo, mantener la decisión de eximir a la demandada del pago de las cotizaciones del seguro de cesantía durante el tiempo en que se extendió la relación laboral y cuyo porcentaje corresponde solucionar a la empleadora. Asimismo, yerra al acoger el recurso de nulidad de la demandada y liberarla del pago de los intereses por el no pago de las cotizaciones previsionales.



En efecto, sobre la premisa de lo que se ha venido razonando, la referida sentencia debió rechazar la pretensión de liberar a la demandada del pago de los intereses por el no pago de cotizaciones previsionales y acoger la relativa al pago de las cotizaciones del seguro de cesantía en los términos indicados, manteniendo en lo demás la decisión de primera instancia.

**Décimo cuarto:** Que, por las consideraciones antes dichas, no cabe sino acoger parcialmente el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante, invalidando, en lo pertinente, el fallo impugnado y procediendo a dictar, acto seguido y en forma separada, la correspondiente sentencia de reemplazo.

Por lo reflexionado, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge**, en lo pertinente, el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante respecto de la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que hizo lugar al recurso de nulidad interpuesto por la demandada, en contra de la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, emanada del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en autos RIT T-1749-2018, RUC 1840147093-6, y procedió a dictar el fallo de reemplazo, y se declara que dicha sentencia es **nula parcialmente**, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo.

Se previene por la ministra **señora Chevesich**, que, si bien tiene una postura diferente sobre la materia de derecho propuesta por el demandante referida a la aplicación de la sanción de la nulidad del despido, en los términos señalados en los votos estampados en sentencias dictadas en causas que tratan de la misma cuestión de derecho, declina incorporarla, teniendo únicamente en consideración que ya se encuentra uniformada por esta Corte en los términos señalados en la sentencia impugnada, sin que se hayan dado a conocer nuevos argumentos que autorice su variación, tampoco que ha sido modificada; en razón de lo anterior, concurre a las restantes decisiones pues se sustentan en aquella.

Acordada con el **voto en contra** de la ministra **señora Chevesich** y del abogado **Sr. Ruz**, quienes fueron de opinión de acoger el arbitrio interpuesto por el demandante también en lo relativo al pago de las cotizaciones de salud del período de vigencia de la relación laboral en la que no fueron solucionadas, esto es, desde el 1 de abril de 2014 al 31 de octubre de 2015, en atención a que, a su juicio, la obligación que el artículo 58 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 17 y 19 del Decreto Ley N° 3.500, impone al empleador, se extiende no sólo a las materias previsionales y de cesantía, sino también a la de salud, dado



que, al igual que los artículos 1° y 3° de la Ley N° 17.322, alude a las “cotizaciones de seguridad social”, sin distinción alguna; y porque corresponde a la judicatura dar eficacia al derecho consagrado en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política, que obliga al Estado, a través de todos sus Poderes, a garantizar el acceso de todos los habitantes a las prestaciones de seguridad social, lo que dada la configuración que la legislación ha hecho del sistema, supone velar por el oportuno cumplimiento de la obligación de aportar, sea de manera directa para los trabajadores independientes o a través de la retención del empleador para los dependientes.

Regístrese.

Rol N° 75.792-2022.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Gloria Ana Chevesich R., Ministros Suplentes señor Juan Manuel Muñoz P., señora Dobra Lusic N., y los abogados integrantes señores Gonzalo Ruz L., y Raúl Patricio Fuentes M. No firma el ministro suplente señor Muñoz Pardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 21/11/2023 13:58:34

DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL  
MINISTRO(S)  
Fecha: 21/11/2023 13:58:35

GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 21/11/2023 13:58:35

RAUL PATRICIO FUENTES  
MECHASQUI  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 21/11/2023 14:09:06



En Santiago, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

**Vistos:**

De la sentencia de reemplazo dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el veintiocho de julio de dos mil veintidós, se elimina su motivación tercera, y se reproduce lo demás.

Asimismo, se dan por reproducidos los razonamientos quinto a duodécimo de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.

**Y se tiene en su lugar y, además, presente:**

**Primero:** Que son hechos acreditados que el demandante prestó servicios en favor de la demandada, que se desarrollaron bajo subordinación y dependencia, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, los que se iniciaron el 1 de abril de 2014 y concluyeron el 31 de agosto de 2018, cuando fue despedido sin cumplimiento de las formalidades previstas por el artículo 162 del Código del Trabajo.

**Segundo:** Que habiéndose acreditado que el empleador no dio cumplimiento a su obligación de pagar las cotizaciones previsionales, deberá ordenarse su entero durante toda la vigencia del vínculo laboral, así como las de cesantía devengadas, en este último caso, únicamente respecto del porcentaje de cargo del empleador.

Dichas cotizaciones, se pagarán con los reajustes e intereses en la modalidad que se indicará en la parte resolutive de esta sentencia, eximiendo a la demandada del pago de las multas, según lo razonado en el fallo de unificación que antecede.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 63, 67, 162, 168, 172, 173, 183-A, 183-B, 446 y siguientes del Código del Trabajo, manteniendo lo no afectado por la invalidación, se declara:

I.- Que **SE ACOGE** la acción deducida por don Elvis William Meza Cabrera en contra de la Subsecretaría del Interior, declarándose que mantuvieron una relación laboral y continua, que se extendió desde el 1 de abril de 2014 al 31 de agosto de 2018, y que el despido de que fue objeto fue injustificado, por lo que se condena a la demandada pagar las siguientes prestaciones:

- a) Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de \$1.838.403.-
- b) Indemnización por años de servicio correspondiente a cuatro años de servicio por un monto de \$ 7.353.612.-
- c) Recargo del 50% respecto de la indemnización por años de servicio conforme la letra b) del artículo 168° del Código del Trabajo, por la suma de \$3.676.806.-



d) Cotizaciones previsionales de los meses de abril de 2014 a agosto de 2018, adeudadas en AFP Habitat.

e) Cotizaciones de cesantía devengadas desde abril de 2014 a agosto de 2018, limitadas al 2,4% de la remuneración imponible.

II.- Que las sumas referidas y condenadas a pagar en las letras a) a c) lo serán debidamente reajustadas y con los intereses previstos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III.- Que las cotizaciones ordenadas pagar en las letras d) y e) devengarán los reajustes que ordenan los artículos 19 del Decreto Ley N°3.500 y 22 de la Ley 17.322, calculados desde la época y en los términos que indican, e intereses calculados conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo, y únicamente desde la época en que esta sentencia quede ejecutoriada, sin considerar la aplicación de multas.

IV.- Que **se rechaza** la demanda en cuanto a la sanción de nulidad del despido y al pago de las cotizaciones de salud pretendida.

V.- Que cada parte pagará sus costas.

Acordada con el **voto en contra** de la de la ministra **señora Chevesich** y el abogado **señor Ruz**, quienes estuvieron por dar lugar el cobro de las cotizaciones de salud, atendidas las razones expuestas en la disidencia de la sentencia de unificación que antecede.

Regístrese y devuélvase.

N° 75.792-2022.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Gloria Ana Chevesich R., Ministros Suplentes señor Juan Manuel Muñoz P., señora Dobra Lusic N., y los abogados integrantes señores Gonzalo Ruz L., y Raúl Patricio Fuentes M. No firma el ministro suplente señor Muñoz Pardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 21/11/2023 13:58:37

DOBRA FRANCISCA LUSIC NADAL  
MINISTRO(S)  
Fecha: 21/11/2023 13:58:37



GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 21/11/2023 13:58:38

RAUL PATRICIO FUENTES  
MECHASQUI  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 21/11/2023 14:09:07





En Santiago, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

